

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO**

Bogotá D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO NO.: 110013103038- **2022-00364-00**
ACCIONANTE: PEDRO ANTONIO PIÑEROS RAMÍREZ
ACCIONADO: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL – DIRECTOR BRIGADIER GENERAL
NELSON RAMÍREZ SUÁREZ

ACCION DE TUTELA -PRIMERA INSTANCIA

Procede el Despacho a decidir la acción de tutela instaurada por el señor PEDRO ANTONIO PIÑEROS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 321.036, en contra de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL – DIRECTOR BRIGADIER GENERAL NELSON RAMÍREZ SUÁREZ, con el fin de que se le proteja su derecho fundamental de petición.

PETICIÓN Y FUNDAMENTOS

Para la protección de los mencionados derechos, el accionante solicita:

"La Caja De Sueldos De Retiro De La Policía Nacional (Casur) dirigida por el señor director Brigadier General ® Nelson Ramírez Suárez, dé respuesta de fondo a la petición realizada dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de esta acción de tutela."

Las anteriores pretensiones se fundan en los hechos que se compendian así:

Manifestó el accionante que presentó derecho de petición bajo el radicado 202221000187622, de manera presencial en las instalaciones de la entidad accionada, solicitando una conciliación extrajudicial para que se le reconozca el reajuste de prima de actividad en el porcentaje del Decreto 2863 de 2007, sin embargo la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL – CASUR, no contestó el derecho de petición ni en forma ni de fondo.

TRÁMITE

Repartida la presente acción a este Despacho Judicial, mediante proveído de 6 de septiembre del año en curso, notificado el mismo día, se admitió y ordenó comunicar a la entidad accionada, la existencia del trámite; igualmente, se dispuso solicitarle que en el término de un (1) día se pronunciara sobre los hechos de esta tutela y de considerarlo procedente, realizara un informe de los

antecedentes del asunto, aportando los documentos que considerara necesarios para la resolución de esta acción.

CONTESTACIÓN

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL: Señaló que el accionante ha interpuesto derechos de petición con solicitud de reajuste de asignación mensual de retiro por concepto de prima de actividad bajo los radicados 017323 del 12/03/2007, 017369 del 12/03/2007, 2013082604 del 23/09/2013, 2014003701 del 27/01/2014, 2014074973 del 07/05/2014, el ID Control 727120 del 23/02/2022 y 751660 del 10/06/2022.

Refirió que en los anteriores derechos de petición, ya se le ha informado las razones por las cuales no es viable acceder a las pretensiones de manera favorables.

Indicó que el derecho de petición elevado ante esta entidad, fue resuelto por medio del comunicado ID Control 751660 del 2022.

Por último, manifestó que el accionante conoce las razones por las cuales no es viable acceder a las pretensiones, por ello, su intención es que la petición presentada sea resuelta de manera favorable, lo que no es procedente por vía de tutela.

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo que refiere el presente expediente de tutela debe determinarse si la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, está vulnerando el derecho fundamental de petición del señor PEDRO ANTONIO PIÑEROS RAMÍREZ, en cuanto no ha dado respuesta ni de forma, ni de fondo al derecho de petición radicado el 10 de junio de 2022.

En atención a que el objeto de la presente acción es la protección del derecho fundamental de petición, resulta necesario realizar las siguientes precisiones:

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra el derecho de petición, desarrollado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en especial por la Ley 1755 de 2015 que sustituyó el Título II de la mencionada Codificación y que regulaba el citado derecho el cual se constituye en derecho fundamental de toda persona y en instrumento de comunicación entre las autoridades administrativas y los particulares.

Así el Derecho Petición permite que toda persona pueda elevar solicitudes respetuosas a las autoridades, sea en interés general o particular, y obtener pronta respuesta, lo que permite concluir, tal como lo sostuvo la Honorable Corte Constitucional (Sentencia C-542 de mayo 24 de 2005), que este derecho hace

efectiva la democracia participativa, así como real la comunicación entre la administración y los particulares y conlleva no solo el poder realizar tales peticiones, sino el derecho a obtener una respuesta pronta, completa y de fondo.

Por tanto, frente al carácter de fundamental que le asiste al derecho de petición, y con el fin de preservar y garantizar su efectividad, ante la falta de atención de las autoridades a las solicitudes de los interesados, surge la posibilidad de acudir a la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional conforme el Decreto 2591 de 1991.

Conforme lo expuesto el derecho de quien formule una solicitud en ejercicio del derecho de petición, no solo conlleva la posibilidad de dirigirse a la Administración sino además su pronta resolución, la cual, valga aclarar, no necesariamente tiene que ser favorable a las pretensiones del accionante, pero sí a que en caso de que no se acceda a lo pedido, se le indiquen las razones de tal determinación.

Tal como se indicó el derecho de petición se encuentra consagrado en artículo 23 de la Constitución Nacional y regulado en la Ley 1755 de 2015 cuyo artículo 14 estipuló el término con que cuenta la administración para responder las peticiones, así:

ARTÍCULO 14 Ley 1755 de 2015. *"Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C- 418/2017, "Reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación":

"1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.

*3) **La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.** (Énfasis realizado fuera de texto)*

4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.

5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.

6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.

7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.

8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.

9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.

En este asunto, el accionante aportó constancia de la petición radicada físicamente en las oficinas de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, el 10 de junio de 2022, que permiten evidenciar que en efecto en dicha fecha, radicó ante la entidad accionada derecho fundamental de petición.

Al respecto, es claro que de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 la entidad accionada contaba con quince días para atender la petición; por tanto, el término para brindar una contestación al derecho de petición objeto de esta controversia, feneció el 6 de julio 2022.

Ahora bien, tal como lo indicó en su contestación la entidad accionada, con oportunidad de la interposición de la presente acción, el derecho de petición del tutelante fue atendido conforme se acreditó en la comunicación notificada el 8 de septiembre de 2022, al correo lapcysma@hotmail.com (Folio No. 14 de la contestación CASUR), donde concretamente le señalaron que, mediante los oficios No.8037/GAG-SDP del 12/09/2007, No. 4177 GAG-SDP del 21/11/2013, No. 4092 GAG-SDP del 06/03/2014 y el ID Control 728715 del 02/03/2022, ya se había resuelto de fondo la solicitud de reajuste de asignación de retiro por concepto de prima de actividad.

Que en dichas comunicaciones le expusieron las razones por las cuales no es procedente atender favorablemente las pretensiones, redirigiéndolo a esas respuestas en virtud del artículo 19 de la Ley 1755 de 2015.

Asimismo, le señalaron que la fuerza pública cuenta con un régimen prestacional especial y no por ello, al momento de darle aplicación se ejerce un trato discriminatorio, por el contrario, es su deber dar aplicación integral a la normativa constitucional.

Por último, le expuso al accionante que la Jurisprudencia aportada por el peticionario, es de aplicación "inter partes", por lo que, sólo produce efectos entre el demandante y demandado.

Así las cosas, si bien no se resolvieron favorablemente las peticiones del accionante, la respuesta es acorde a la normatividad, puesto que es clara y da una respuesta de fondo.

Lo anterior es razón suficiente para aplicar la figura del hecho superado, pues así lo ha reiterado la Corte Constitucional, indicando que no deberán tutelarse los derechos invocados cuando el Juez advierta la existencia del hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, como es caso. En otras palabras, que ya no existirían circunstancias reales que ameriten la decisión del juez de tutela.

Cuando se presenta el hecho superado la Corte Constitucional en Sentencia T-011 de 2016 indicó:

""El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que "carece" de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Es decir, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones de el accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor".

Habiéndose resuelto con oportunidad de la notificación de esta acción, el derecho de petición objeto de la interposición de esta tutela, es claro que el despacho carece de objeto para proferir orden alguna en relación con aquellas, y por ende se negará la misma.

*En mérito de lo expuesto el **JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,*

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela instaurada por el señor PEDRO ANTONIO PIÑEROS RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 321.036, en contra de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL – DIRECTOR BRIGADIER GENERAL NELSON RAMÍREZ SUÁREZ, al configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado.

SEGUNDO: ENTERAR a los extremos de esta acción, que contra la presente determinación procede la impugnación, ante la Sala Civil del H. Tribunal Superior de este Distrito Judicial.

TERCERO: REMITIR sin tardanza esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que el fallo no sea impugnado; lo anterior en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 31 del precitado decreto.

CUARTO: NOTIFICAR el presente fallo por el medio más expedito, de tal manera que asegure su cumplimiento, tal como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



CONSTANZA ALICIA PIÑEROS VARGAS
JUEZ

DMR

Firmado Por:

Constanza Alicia Pineros Vargas

Juez Circuito

Juzgado De Circuito

Civil 038

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 76c95ac09cf82d5699c6e6352ff39eff0d772fa299a541e848e7a9a215b36f65

Documento generado en 13/09/2022 08:01:49 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>